



GD-F-008 V.9

Página 1 de 8

## **RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010039245 DEL 28/03/2017**

**"Por la cual se resuelve un recurso de reposición"**

### **EL COORDINADOR DEL GRUPO DE CERTIFICACIONES E INFORMACIÓN**

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300023445 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y,

#### **CONSIDERANDO:**

##### **1. ANTECEDENTES**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

Que el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007."*

Que el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300023445 del 24 de marzo del 2017, delegó en el Asesor que funge como Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Que el Municipio de CONVENCION del Departamento de NORTE DE SANTANDER, es de categoría 6 y al haber sido prestador directo de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo a 31 de diciembre de 2015, para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015.

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010052555 del 30 de septiembre de 2016, la Superintendencia decidió DESCERTIFICAR al Municipio de CONVENCION del Departamento de NORTE DE SANTANDER, por no haber cumplido los siguientes criterios previstos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015:

- *"Reporte en el SUI del acuerdo de aprobación de porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya".*



- *"Reporte en el SUI del estudio de costos y tarifas en formato PDF, elaborado con posterioridad a la entrada en vigencia de las metodologías tarifarias para cada uno de los servicios públicos prestados - Estudio de Costos y Tarifas para el servicio de Aseo".*

La Resolución No. SSPD 20164010052555 del 30 de septiembre de 2016 se notificó personalmente por medio electrónico el 13 de octubre de 2016, tal y como se observa en el expediente.

Que el Municipio de CONVENCION - NORTE DE SANTANDER mediante escrito radicado bajo el número SSPD 20165290724102 del 24 octubre de 2016, interpuso oportunamente recurso de reposición contra la resolución de descertificación.

## **2. ARGUMENTOS DEL MUNICIPIO Y PRUEBAS APORTADAS CON EL RECURSO DE REPOSICIÓN**

2.1 El municipio manifestó *"(...) La Ley 1450 de 2011 es la ley del plan nacional de desarrollo 2010-2014, la vigencia de este es para el periodo del presidente, este termina el 7 de agosto de 2014. Así las cosas podemos concluir que el acuerdo 029 del 26 de noviembre del 2014, se promulgó cuando la ley 1450 de 2011 ya no se encontraba vigente, su artículo 125 que definía los porcentajes mínimos de aportes solidarios para el sector comercial e industrial fue revivido en el artículo 267 de la ley 1753 del 9 de junio de 2015, vigente hasta el 2018; mientras se aprobaba el nuevo plan de desarrollo regía para este tema el artículo 89.1 de la ley 142 de 1994, actualmente está modificado transitoriamente por la ley 1753 hasta el año 2018".*

Por lo anterior, concluyó que al haberse expedido el Acuerdo No. 029 de 26 de noviembre de 2014, cuando ya no era vigente la Ley 1450 de 2011 y previo a la expedición de la Ley 1753 de 2015 (Plan de Desarrollo 2014 – 2018), norma que revivió el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, dicho acto cumplía con las disposiciones legales, además de gozar de presunción de legalidad.

2.2 Manifestó no contar con uso industrial y que el comercial se compone de tiendas pequeñas, que tienen su local en las residencias de los propietarios, por lo que un aumento en la factura conlleva al no pago por parte de los usuarios del servicio.

2.3 Indicó que la nueva administración no podía reportar un acuerdo distinto al proferido en el año 2014 que fue el vigente para el año 2015 y en consecuencia tener dicho documento como fundamento para descertificar al ente territorial, conllevaría a que el municipio estuviera descertificado sin iniciar el proceso de certificación, lo que le negaría la posibilidad de acceder al manejo de los recursos del SGP - APSB.

2.4 Señaló respecto al estudio de costos del servicio de aseo, que si para el Despacho no era clara su aplicación de la metodología tarifaria, dicha duda tendría que haber sido resuelto en favor del administrado.

2.5 Arguyó que analizando el escenario del estudio de costos reportado, no era confiable pero no podía modificarlo porque incurriría en una falsedad documental.

2.6 Afirmó que tiene problemas de invasiones con suscriptores que demandan la prestación del servicio pero no lo pagan, lo que aunado con los problemas de orden público que aquejan al municipio, conlleva a la necesidad de cubrir los costos permanentes que se generan.

2.7 Con el recurso de reposición, el municipio aportó los siguientes documentos:

2.7.1 Acuerdo municipal No. 029 del 26 de noviembre de 2014 *“por medio del cual se establecen los factores de subsidios y los factores de aporte solidario para los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Convención para la vigencia 2015”*

2.7.2 Pantallazo de análisis de costos y tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

2.7.3 Pantallazo de la oficina de prensa del Senado de la República.

2.7.4 Copia de cédula, credencial y acta de posesión del Alcalde Municipal de Convención.

2.7.5 Copia de análisis de costos y tarifas al que hizo alusión el municipio en su recurso de reposición.

2.7.6 Extracto de un artículo respecto a interpretación de normas del Plan de Desarrollo y de un artículo de 17 de febrero de 2011 en el cual se solicita aclaración sobre vigencia del Plan de Desarrollo anterior al expedido con la Ley 1450 de 2011.

Los anteriores documentos, con su valor legal se incorporan al expediente.

### 3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta Superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual se efectuará de la siguiente manera:

**3.1. Argumentos expuestos sobre el requisito relacionado con el “Reporte en el SUI del acuerdo de aprobación de porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complementa o sustituya”.**

El municipio manifestó que *“(…) La Ley 1450 de 2011 es la ley del plan nacional de desarrollo 2010-2014, la vigencia de este es para el periodo del presidente, este termina el 7 de agosto de 2014. Así las cosas podemos concluir que el acuerdo 029 del 26 de noviembre del 2014, se promulgó cuando la ley 1450 de 2011 ya no se encontraba vigente, su artículo 125 que definía los porcentajes mínimos de aportes solidarios para el sector comercial e industrial fue revivido en el artículo 267 de la ley 1753 del 9 de junio de 2015, vigente hasta el 2018; mientras se aprobaba el nuevo plan de desarrollo regía para este tema el artículo 89.1 de la ley 142 de 1994, actualmente está modificado transitoriamente por la ley 1753 hasta el año 2018”*.

Por lo anterior, concluyó que al haberse expedido el Acuerdo No. 029 de 26 de noviembre de 2014, cuando ya no era vigente la Ley 1450 de 2011 y previo a la expedición de la Ley 1753 de 2015 (Plan de Desarrollo 2014 – 2018), norma que revivió el artículo 125 de la Ley 1450 de

2011, dicho acto cumplía con las disposiciones legales, además de gozar de presunción de legalidad.

Arguyó no contar con el uso industrial y que el comercial se compone de tiendas pequeñas, que tienen su local en las residencias de los propietarios, por lo que un aumento en la factura conlleva al no pago por parte de los usuarios del servicio.

Indicó que la nueva administración no podía reportar un acuerdo distinto al proferido en el año 2014 que fue el vigente para el año 2015, y en consecuencia tener el mismo como fundamento para descertificar al ente territorial conllevaría a que el municipio estuviera descertificado sin iniciar el proceso de certificación lo que le negaría la posibilidad de acceder al manejo de los recursos del SGP - APSB.

Para el desarrollo y análisis de estos argumentos, es importante recordar que en la resolución recurrida se señaló que *"El Acuerdo Municipal No. 029 del 26 de noviembre de 2014, por el cual se estableció los porcentajes de subsidios y aportes solidarios para la vigencia 2015, no observa los porcentajes establecidos en la Ley 1450 de 2011, para los suscriptores industriales y comerciales"*. Lo anterior se verifica en el citado documento en los siguientes términos:



#### ACUERDA

**ARTICULO PRIMERO:** Los factores de subsidios para los suscriptores o usuarios clase residenciales de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para el Municipio de Convención, Norte de Santander, estratos 1, 2 y 3 para la vigencia 2015, serán:

	Estrato uno	Estrato dos	Estrato tres
Cargo fijo y consumo básico acueducto	50%	35%	15%
Cargo fijo y consumo básico alcantarillado	50%	35%	15%
Cargo fijo aseo	50%	35%	15%

**ARTICULO SEGUNDO:** El factor solidario para los usuarios comerciales e industriales será del 20% del valor del cargo fijo y el total del consumo

**ARTICULO TERCERO:** El presente acuerdo rige a partir del 1 de Enero del 2015, previa sanción y publicación.

Dado en el H. Concejo Municipal de Convención, Norte de Santander a los veintiséis (26) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Catorce (2014).

En este orden de ideas, es claro que el acuerdo reportado por el ente territorial y vigente para el año 2015, fijó un porcentaje de 20% de aporte solidario para los usos comercial e industrial, cuando la Ley 1450 de 2011 estableció unos porcentajes mínimos de 50% y 30% para cada uno de estos, respectivamente.

Ahora bien, para dar inicio con el análisis de los argumentos planteados en el recurso, se hace necesario hacer algunas precisiones en cuanto al concepto de vigencia de la Ley 1450 de 2011.

Al respecto, se debe acudir al artículo 276 *ibídem*, en el cual se establece la vigencia de dicha norma:

**"Artículo 276. Vigencias y derogatorias.** La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias (...)"

Tal y como se observa, la mencionada Ley *"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014"* tuvo un efecto general inmediato, es decir rigió a partir del 16 de junio de 2011, fecha en que fue publicada.

Respecto a la vigencia de la ley, la Corte Constitucional ha señalado: *"...los artículos 17 a 49 de la Ley 153 de 1887 que de manera general, en relación con diversos tipos de leyes, prescriben que*

*ellas rigen hacia el futuro y regulan todas las situaciones jurídicas que ocurran con posterioridad a su vigencia*<sup>1</sup>.

En este sentido, es claro que la Ley 1450 de 2011 está vigente salvo que una norma la derogue expresa o tácitamente y en consecuencia, al no haber sido derogada para la fecha de expedición del Acuerdo No. 029 de 26 de noviembre de 2014 regía para el mismo y en consecuencia dicho acto debía observar los porcentajes establecidos en la misma.

Lo anterior, máxime cuando el artículo 267 de la Ley 1753 de 2015 *"Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018"*, no revive el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, sino que al expedir el nuevo Plan de Desarrollo y no establecer una nueva disposición específica que regulara la materia, retoma esta última disposición para manifestar que continua vigente.

*"ARTÍCULO 267. VIGENCIAS Y DEROGATORIAS. La presente ley rige a partir de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.*

*(...)*

*Con el fin de dar continuidad a los planes, programas y proyectos de mediano y largo plazo, los artículos de las Leyes 812 de 2003, 1151 de 2007 y 1450 de 2011 no derogados expresamente en el inciso anterior o por otras leyes continuarán vigentes hasta que sean derogados o modificados por norma posterior".*

Para redundar en razones, es claro que el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011 no ha sido derogado en momento alguno toda vez que la Ley 152 de 1994 por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, estableció dentro de sus principios generales el de continuidad, con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades territoriales, propendiendo las respectivas autoridades de planeación porque aquéllos tengan cabal culminación, lo que de suyo conlleva igualmente a concluir que el artículo 125 *ibidem* continuaba vigente hasta que no fuera derogado expresa o tácitamente por una norma posterior, situación que no se presentó en el caso concreto.

Por otra parte, respecto al hecho que en el municipio manifieste que con independencia de los porcentajes establecidos en el acuerdo, no cuenta con predios en el uso industrial y respecto al comercial se compone de tiendas pequeñas, que tienen su local en las residencias de los propietarios, por lo que un aumento en la factura conlleva al no pago por parte de los usuarios del servicio, se debe señalar que ello no conlleva a exonerar al municipio de su obligación de cumplir la norma.

Sobre el particular, en la sentencia C-957 de 1999 se afirmó por la Corte Constitucional, lo siguiente:

*"En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación, salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial, dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos".*

En estas condiciones tenemos que la Ley 1450 de 2011, al haber sido publicada en el Diario Oficial 48102 del 16 de junio de 2011 cumplió con el principio de la publicidad y con ello originó su fuerza vinculante, es decir, se tornó obligatoria y oponible a terceros.

En ese orden de ideas, la reglamentación que la citada ley realizó en materia de subsidios y aporte solidario, debía ser aplicada a partir de su entrada en vigencia, es decir desde el 16 de junio de 2011 y fue así como el legislador dispuso que a partir de la expedición de la Ley 1450 de 2011, los acuerdos que fijaran los porcentajes de subsidios y contribuciones debían observar los rangos de porcentajes máximos de subsidios y mínimos de aporte solidario que deben tener en cuenta los concejos municipales al fijar dichos porcentajes y factores.

En efecto, el Decreto 1077 de 2015 dispone que el acuerdo en cuestión debe **“estar expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011”**, esta SSPD no puede acreditar el cumplimiento de este requisito con un Acuerdo Municipal que no se ajusta a las previsiones de la referida ley, como quedó evidenciado. Lo anterior, sin que se esté realizando un juicio de legalidad frente a dicho acto, toda vez que la función de esta entidad es verificar que la información que reporten los municipios y distritos al SUI, cumpla con lo ordenado por el Decreto 1077 de 2015.

Por consiguiente, es claro que no es justificación que el ente territorial no cuente con predios en el uso industrial, o que haya pequeños comercios a los cuales incrementarles el porcentaje conlleve al no pago por parte de estos, ya que ello no fue distinguido por la norma para fijar el porcentaje de aporte solidario en dichos usos, en razón a lo cual, el ente territorial debe tener un acuerdo que cumpla los porcentajes conforme a la Ley 1450 de 2011 y el prestador de servicios públicos, está obligado a cobrar la tarifa conforme a la norma.

Finalmente, respecto al argumento relacionado con que la nueva administración no podía modificar el acuerdo vigente, es de recordar que el proceso de certificación es de carácter institucional y por tanto es el ente territorial como tal, quien debe acreditar su cumplimiento a los requisitos y recibe las consecuencias de una certificación o descertificación, con independencia del funcionario que desempeñara el cargo de Alcalde Municipal en el mismo y de las responsabilidades que se den al interior del ente territorial. En consecuencia, una vez transcurrido el término para verificar el cumplimiento del requisito en cuestión para la vigencia 2015, este Despacho constató que el hoy recurrente no dio cumplimiento a lo ordenado por la norma y en consecuencia el municipio fue descertificado.

Así las cosas, se concluye que teniendo en cuenta lo expuesto, el argumento en comento no está llamado a prosperar.

**3.2. Argumentos expuestos sobre el requisito relacionado con el “Reporte en el SUI del estudio de costos y tarifas en formato PDF, elaborado con posterioridad a la entrada en vigencia de las metodologías tarifarias para cada uno de los servicios públicos prestados - Estudio de Costos y Tarifas para el servicio de Aseo”.**

Señaló, respecto al estudio de costos del servicio de aseo, que si para el Despacho no era clara su aplicación de la metodología tarifaria, dicha duda tendría que haber sido resuelto en favor del administrado.

Arguyó que analizando el escenario del estudio de costos reportado, el mismo no era confiable pero no podía modificarlo porque incurriría en una falsedad documental.

Afirmó que tiene problemas de invasiones con suscriptores que demandan la prestación del servicio pero no lo pagan, lo que aunado con los problemas de orden público que aquejan al municipio, conlleva a la necesidad de cubrir los costos permanentes que se generan.

De los argumentos del recurrente relacionados con la falta de claridad de la metodología utilizada en la elaboración del estudio de costos y tarifas de aseo, que según él debe favorecerle, tenemos que para el Despacho no existe duda sobre la metodología que debe tener un estudio de costos y tarifas y que respecto al servicio de aseo, la contenida en el documento reportado no era clara, es decir no estaba conforme a lo establecido por la Resolución CRA 351 de 2005 que establece específicamente como debe hacerse un estudio de costos para dicho servicio. Lo anterior se evidencia en la resolución de descertificación, en la que se dejó muy clara esta conclusión al señalar expresamente *“Así mismo, reportó en SUI un documento, sin embargo este no corresponde al estudio de costos de aseo”*, tal afirmación no deja espacio para pensar que esta Superintendencia tuviera dudas respecto al incumplimiento del municipio, máxime cuando la Resolución 351 de 2005 contiene las indicaciones de cálculo para la determinación de las tarifas a cobrar a los usuarios por el servicio público domiciliario de aseo, los cuales se resumen de la siguiente manera:

1. *Costo Fijo Medio de Referencia, CFMR*-. El costo fijo medio de referencia por suscriptor se calculará a partir de la sumatoria de los costos de comercialización por suscriptor más el costo de barrido y limpieza de vías y áreas públicas, más el costo de manejo del recaudo fijo así:

Donde: *CFMR* Costo fijo medio de referencia máximo a reconocer en la tarifa en el área de servicio (\$/suscriptor).

*CBL* Costo de barrido y limpieza (\$/ Kilómetro).

*K* Sumatoria de todos los kilómetros de cuneta barridos por todos los prestadores que operan en el suelo urbano del municipio para el año base, en un periodo de un mes, según las frecuencias definidas para el municipio. (Kilómetros).

*NB* Número total de suscriptores atendidos por los prestadores, en el suelo urbano del municipio, para el año base (suscriptor).

*CCS* Costo de comercialización por factura cobrada al suscriptor (\$/suscriptor).

*CMR<sub>F</sub>* Costo de manejo del recaudo fijo (\$/suscriptor).

2. *Costo Variable Medio de Referencia, CVMR*. El costo variable medio de referencia se calculará a partir de la sumatoria del costo de recolección y transporte más el costo de transporte por tramo excedente más el costo de tratamiento y disposición final, más un costo por manejo del recaudo variable así:

$$CVMR = CRT + CTE_P + CDT_P + CMR_V$$

Dónde: *CVMR* Costo variable medio de referencia máximo a reconocer en la tarifa en el área de servicio (\$/tonelada).

*CRT* Costo de recolección y transporte (\$/tonelada).

*CTE<sub>P</sub>* Costo de transporte por tramo excedente, calculado como el promedio del tramo excedente ponderado por las toneladas provenientes del área de servicio (\$/tonelada).

*CDT<sub>P</sub>* Costo de disposición final promedio calculado, cuando hay más de un sitio de disposición final, como el promedio de los costos (CDT) de estos, ponderado por las toneladas del área de servicio que se disponen en cada uno (\$/tonelada).

*CMR<sub>V</sub>* Costo de Manejo de Recaudo Variable (\$/tonelada)

De acuerdo a lo anterior, existe plena convicción respecto al incumplimiento del municipio en su reporte del estudio de costos y tarifas del servicio de aseo, documento que al ser tan ambiguo conllevaba a evidenciar su incumplimiento a la metodología que claramente establece la Resolución CRA 351 de 2005 y que debió adoptar el ente territorial para el servicio de aseo, pero que incumplió el requerimiento normativo al cargar y certificar el documento en cuestión.

Lo anterior se constata en el recurso de reposición interpuesto por el municipio, en el cual el ente territorial manifiesta que no era confiable el estudio de costos reportado, lo cual denota nuevamente la falta de claridad de dicho estudio y permite evidenciar que el recurrente pretende alegar la propia culpa a su favor al manifestar que conociendo dicho hecho, procedió a reportar dicho documento, en lugar de surtir el trámite legal para su modificación previo a reportarlo.

En efecto, se reitera que al encontrar un documento que no correspondía al exigido por la norma, debió expedir uno que si acatara la metodología señalada en la resolución referida anteriormente, ya que el municipio como tal era el responsable del cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 y 2.3.5.1.2.1.7 del Decreto 1077 de 2015 con independencia de quien ostentara el cargo de alcalde municipal en el mismo.

Finalmente, respecto al hecho de tener problemas con el cobro por la prestación de servicios públicos alegado por el recurrente, es claro que ello no conlleva a permitir que el ente territorial no cuente con un estudio de costos de aseo conforme a la Resolución CRA 351 de 2005, norma que no establece distinción respecto a dicha circunstancia para su cumplimiento, ni conlleva a certificar al ente territorial para la administración de recursos del SGP - APSB 2015 toda vez que es claro que, si el municipio pretendía ser certificado debía cumplir los requisitos establecidos en el Decreto 1077 de 2015, lo que al no predicarse cabalmente para el caso concreto, conllevó a su descertificación.

Conforme a lo expuesto, esta Superintendencia concluye que los argumentos descritos en el recurso, como los elementos de prueba, no permiten desvirtuar lo dispuesto en la resolución de descertificación, esto es su incumplimiento a los requisitos "Reporte en el SUI del acuerdo de aprobación de porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados en la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemente o sustituya" y "Reporte en el SUI del estudio de costos y tarifas en formato PDF, elaborado con posterioridad a la entrada en vigencia de las metodologías tarifarias para cada uno de los servicios públicos prestados", en razón a lo cual, el recurso formulado por el MUNICIPIO DE CONVENCION – NORTE DE SANTANDER, no prospera y la resolución recurrida se confirma.

En mérito de lo expuesto, se

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR** la Resolución No. SSPD 20164010052555 del 30 de septiembre de 2016, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** personalmente de la presente resolución al Alcalde del Municipio de CONVENCION del Departamento de NORTE DE SANTANDER, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno.

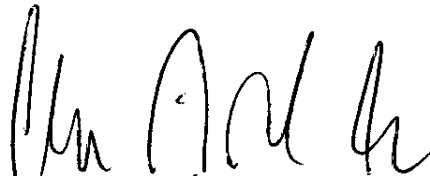
De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR** el contenido de la presente resolución al Gobernador del Departamento de NORTE DE SANTANDER, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C.



**CARLOS ANDRÉS BERNAL CASAS**

Coordinador del Grupo de Certificaciones e Información

Proyectó: Katherine Arenas— Abogada Contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Expediente: 2016401351600287E